GUÍA PARA LLEVAR A CABO EL COBRO DE PÓLIZAS DE FIANZAS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, OTORGADAS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

Secretaría de Finanzas y Administración

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo

L.A.E. Luis Navarro García

Secretario de Finanzas y Administración

Dr. Sergio García Lara

Director General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración

Mtro. Mauricio Garibay Villagómez

Director Técnico y de Legislación de la Dirección General Jurídica

CONTENIDO

Presentación.....3

I. Definiciones.....5

II. Legislación aplicable para la afectación de fianzas.....7

III. Observación y aplicación de requisitos para estar en condiciones de realizar las afectaciones de fianzas.....9

IV. Explicación al proceso para hacer efectivas las fianzas.....12

V. Circunstancias por las que se vuelve incobrable una fianza y sus efectos.....17

VI. Referencias bibliográficas.....21

PRESENTACIÓN

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2027, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 8 de agosto de 2022, señala en el Eje 3. Prosperidad Económica, Estrategia 3.1. que, para efecto de favorecer la inversión pública y privada en el Estado de Michoacán, es indispensable garantizar la existencia de finanzas públicas saludables, pues no debe perderse de vista que es prioridad para nuestro gobierno impulsar la reactivación económica. Esto bajo la premisa de que el incremento de la productividad y la competitividad, deben conformarse como los medios idóneos para conseguir el objetivo social primordial, consistente en procurar el bienestar de la población en el Estado.

En ese respecto, las fianzas se conforman como un medio idóneo que permiten lograr finanzas saludables para el Estado de Michoacán, al procurar el bienestar de la población michoacana. Ello así, toda vez que las mismas consisten en documentos contractuales adhesivos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan por parte de los particulares (en su calidad de contratistas), respecto de los contratos principales que celebren con las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo (en su calidad de contratantes). Asimismo, en caso de que se suscite un incumplimiento contractual, dichas garantías podrán ser sometidas a un proceso especial de cobro, de tal suerte que, al hacerse efectivas, los montos que son pagados por las instituciones afianzadoras son ingresos de libre ejercicio que están catalogados como "Aprovechamientos", de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dicho lo anterior, la presente guía tiene por objeto lograr que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, comprendan de manera correcta y eficaz, como realizar las solicitudes de afectación de fianzas a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que ésta a su vez, a través de la Dirección Técnica y de Legislación de la Dirección General Jurídica, realice el procedimiento de cobro de pólizas de fianzas distintas de las que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros.

Así mismo, también encuentra justificación la emisión de esta guía, el hecho de que, con el paso del tiempo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha emitido diversas sentencias definitivas con criterios jurisdiccionales que, en consecuencia, han derivado en la nulidad de numerosos requerimientos de pago de fianzas por supuestas deficiencias. Motivo por el cual, resulta indispensable observar de manera puntual todas las formalidades y requisitos que prevén los ordenamientos legales aplicables.

En conclusión, con base en lo expuesto en esta presentación, resultaba necesario emitir una guía que facilite la realización de todas las acciones encaminadas a que esta Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, se encuentre jurídica y materialmente en condiciones óptimas, para efecto de que, a través de la Dirección Técnica y de Legislación de la Dirección General Jurídica, realice el correspondiente proceso de ejecución de fianzas.

L.A.E. Luis Navarro García

Secretario de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Michoacán.

I. Definiciones.

En virtud de que es necesario comprender en su totalidad todos los términos en materia de las fianzas que nos ocupan, se realiza a continuación, un listado de las definiciones que resultan más importantes y que ayudaran al entendimiento de la presente guía:

a. Afianzadora (s): Institución Afianzadora que asume una obligación frente al Beneficiario de la póliza de fianza;

b. Beneficiario: Titular del derecho que deriva de la emisión de la(s) póliza(s) de fianza, ostentándose con tal carácter en el presente, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo;

c. Caducidad: La pérdida del derecho de reclamar la fianza por el transcurso del plazo legal aplicable;

d. Dependencias: Aquellas a las que se refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo;

e. Dirección: La Dirección Técnica y de Legislación, que se conforma como unidad administrativa adscrita a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, facultada de realizar la afectación de fianzas que sean solicitadas por las dependencias y/o entidades, de conformidad al artículo 48, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración.

f. Entidades: Aquellas a las que se refieren los artículos 7 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo;

g. Estado: el Estado de Michoacán de Ocampo;

h. Exigibilidad: El momento jurídico en que la obligación garantizada puede ser reclamada conforme al contrato, la póliza y la legislación aplicable;

i. Expediente: El conjunto ordenado, foliado y trazable de documentos físicos y/o electrónicos que sustentan la afectación;

j. Fiado: Persona física o moral, que tiene o contrae una obligación con el Estado y por la cual debe garantizar su cumplimiento;

k. Fianza (s): Documentos contractuales adhesivos denominados pólizas, a través de las cuales se garantizan en favor del Gobierno del Estado de Michoacán, las

obligaciones de un contrato principal, y que son distintas de las obligaciones fiscales a cargo de terceros, así como que son constituidas a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo;

l. Guía: Guía para llevar a cabo el Cobro de Pólizas de Fianzas Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales a Cargo de Terceros Otorgadas a Favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo;

m. Ley: Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas;

n. Liquidación formulada: El documento que determina, de manera clara, verificable y documentada, el monto reclamable por concepto de fianza;

ñ. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración;

o. Reglamento de la Ley: Reglamento al Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de Terceros (actualmente vigente por virtud de la Décima Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas);

p. Requerimiento: El acto de autoridad mediante el cual se reclama a la Afianzadora el pago de la obligación garantizada; y

q. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo.

II. Legislación aplicable para la afectación de fianzas.

Que para hacer efectivas aquellas fianzas que son distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros y que son otorgadas a favor del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En ese sentido, a continuación, se explica de forma clara y sucinta como debe llevarse a cabo el proceso de afectación, de acuerdo con los preceptos previamente citados:

1. Al volverse exigible una fianza por virtud de la resolución que emita la dependencia o ente que la hubiere aceptado (rescisión o terminación anticipada), deberá solicitarse su afectación a la Secretaría en su carácter de autoridad ejecutora, debiendo acompañarse a la solicitud de mérito, la documentación relativa a la fianza y a la obligación que garantizó.

2. Una vez que la Secretaría cuente con todos los elementos necesarios previstos por la Ley, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución. El oficio que para tal efecto formule, deberá encontrarse debidamente fundado y motivado.

3. Posteriormente, en un lapso de treinta días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, la institución se encontrará obligada a comprobar a la Secretaría, haber realizado el pago de las pólizas o, en su caso, haber demandado la nulidad del requerimiento (en caso de interponerse juicio de nulidad, se suspenderá el procedimiento de ejecución hasta que sea emitida sentencia firme). En caso contrario, la Dirección solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ordene se rematen valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe del requerimiento de pago.

   En caso de que la institución sostenga que una póliza de fianza sea falsa, la Comisión de Instituciones de Seguros y Fianzas, sólo suspenderá o dará por terminado el procedimiento de remate de valores, por resolución expresa que reciba del Ministerio Público o del Juez que conozca del asunto.

Ahora bien, para efecto de señalar de manera concreta como llevar a cabo la ejecución de las fianzas, así como para puntualizar cuales son los requisitos indispensables para tal procedimiento, la Ley remite al Reglamento al Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a

Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de Terceros; ordenamiento que a su vez tiene por objeto hacer más ágil y eficiente el cobro de las aludidas garantías. Asimismo, no se omite manifestar que el aludido Reglamento de la Ley, si bien refiere reglar un artículo de un ordenamiento jurídico que actualmente se encuentra abrogado, el mismo se encuentra vigente por virtud de la Décima Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, toda vez que, a fecha del presente, no se ha expedido un Reglamento con el objeto de reglar los artículos 278 y 282 de la norma citada.

Por último, conviene precisar que las pólizas de fianza de las que sea solicitada su afectación, deben haberse emitido en favor de esta Secretaría como beneficiaria, toda vez que ello faculta a ésta última (en su carácter de autoridad ejecutora), para ejercer el cobro coactivo de dichas garantías. Esto incluso es previsto por los ordenamientos que rigen a las dependencias y/o entidades contratantes.

Para demostrar lo anterior, se puede observar que de conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el artículo 32, fracción I, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, y el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (sic) del Estado de Michoacán de Ocampo; las pólizas de fianza que garanticen contratos (celebrados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo), principalmente de obra pública, prestación de servicios y de proveedores, se deben constituir en favor de la Secretaría de Finanzas y Administración, y ésta, en virtud de las atribuciones que legalmente le fueron conferidas a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como por ser la beneficiaria de las mismas, le corresponde realizar las afectaciones de fianza que le sean solicitadas, cuando resulte procedente.

III. Observación y aplicación de requisitos para estar en condiciones de realizar las afectaciones de fianzas.

Para efecto de ejercer la facultad de suscribir los requerimientos de pago de pólizas de fianza otorgadas a favor de la Secretaría, de conformidad con la legislación aplicable, la Dirección realizará en términos de sus facultades, las gestiones necesarias para encontrarse en condiciones idóneas de requerir el pago a las afianzadoras, tales como requerir información documental faltante o que se considere indispensable para llevar a cabo la afectación de fianzas, solicitar datos de alta relevancia, entre otras.

Bajo ese contexto, es indispensable señalar que, para que la Dirección en representación de la Secretaría, ejecute su facultad de suscribir los requerimientos de pago de pólizas de fianzas, las dependencias y/o entidades deben realizar previamente, en observancia al artículo 1°, fracción II, del Reglamento de la Ley, un oficio dirigido conjuntamente a la Secretaría y a la Dirección, mediante el cual les sea solicitado que se realice la afectación de fianzas deseada, debiendo contener dicho oficio los datos siguientes:

a. Nombre de la autoridad u oficina remitente;

b. Lugar y fecha;

c. Nombre del fiado;

d. Importe de la obligación o crédito y, en su caso, con sus accesorios legales a cobrar;

e. Concepto de la obligación o crédito;

f. Fecha en que se hizo exigible la obligación o crédito a cargo del fiado;

g. Institución fiadora;

h. Número, fecha e importe de la póliza de la fianza y, en su caso, de los documentos modificatorios de la misma;

i. Relación de los documentos que forman el expediente, con respecto a la obligación o crédito de que se trate, que están señalados en el artículo sucesivo; y

j. Nombre y firma del funcionario o jefe de la oficina, o de quien los sustituya.

Una vez que se remita el oficio de solicitud de afectación de fianza por parte de la dependencia y/o entidad, ésta última también deberá enviar paralelamente copia de conocimiento sobre dicha solicitud a la afianzadora, de conformidad con el último párrafo del artículo 1° del Reglamento de la Ley. Es de suma importancia precisar que esta obligación debe colmarse a cabalidad, toda vez que las afianzadoras, al momento de impugnar los requerimientos de pago, suelen realizar argumentos en contra de la omisión de que se les envíe copia de conocimiento del oficio de solicitud en comento, aduciendo transgresión de los principios de legalidad y de certeza jurídica en su perjuicio.

Precisado lo anterior, es de suma importancia que las dependencias y/o entidades solicitantes cumplan con los requisitos previamente especificados, toda vez que, como se dijo en el apartado de "Presentación", el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha emitido diversos criterios rígidos a través de sentencias definitivas, por virtud de los cuales ha resuelto decretar la nulidad de los requerimientos de pago de fianzas, aduciendo la falta en el cumplimiento de dichos requisitos.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos que fue emitida una sentencia definitiva por parte de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad número 1115/22-21-01-6-OT, donde resolvió decretar la nulidad lisa y llana del requerimiento de pago de fianza, con motivo de no haber sido demostrado en juicio la existencia de alguna documental de solicitud dirigida conjuntamente a la Secretaría y a la Dirección, a fin de acreditar el ejercicio de ésta última en cuanto a su facultad para suscribir el requerimiento de pago, ya que, en principio, el oficio de solicitud de afectación de fianza realizado por la dependencia, fue dirigido únicamente a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Para efectos ilustrativos, se transcribe a continuación la parte conducente de los párrafos de la sentencia de referencia, que es relativa al argumento por el que es decretada la nulidad lisa y llana:

> "*Del análisis de las disposiciones transcritas, se observa que la autoridad emisora de la resolución impugnada; el Director Técnico y de Legislación de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, fundó su competencia material entre otras en las atribuciones establecidas 15, fracción V, inciso b), y 48, fracciones XII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración vigente al momento de emisión de la citada resolución, de cuyo texto se desprende su existencia y facultades; esto es, el numeral 15 fracción*

V, inciso b), prevé la existencia de la "Dirección Técnica y de Legislación" adscrita a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, y el numeral 48, establece que puede ejercer, sustentando la resolución únicamente en las previstas en las fracciones XII y XVII; que le otorgan competencia para; "suscribir el requerimiento de pago de pólizas de fianzas emitidas a favor de la Secretaría, cuando así se solicite por la autoridad administrativa competente y siempre y cuando se cuente con toda la información y documentación para tal efecto"; y, "Las demás que le señalen los titulares de la Secretaría, de la Dirección General Jurídica, y otras disposiciones legales aplicables"; sin embargo, del texto de la fracción XII condiciona el ejercicio del Director Técnico y de Legislación para intervenir en el procedimiento relacionado con el requerimiento de pago de póliza de fianzas, cuando así lo solicite la autoridad administrativa competente, lo cual en el caso particular no se demuestra se haya realizado.

En efecto, de las pruebas documentales aportadas por las partes, ***no existe alguna con la que se pueda constatar que la demandada cumplió con el requisito sine qua non previsto en la fracción XII, del citado artículo 48****, ello, a fin de comprobar que efectivamente se cumplió con la condicionante ahí plasmada, esto es,* ***la petición previa formulada por la autoridad administrativa competente para que, con base en ella el Director Técnico y de Legislación de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, pudiese intervenir en el requerimiento de pago de la póliza de fianza que nos ocupa****."*

Es entonces, con base en lo expuesto, que se insiste en que deben ser colmados a cabalidad todos los requisitos que se detallan en el artículo 1°, fracción II, y último párrafo del Reglamento de la Ley, al momento de solicitar una afectación de fianza. Esto así, debido a que el cumplimiento de las obligaciones referidas por parte de las dependencias o entes públicos, permite blindar la validez jurídica de las afectaciones de fianzas que se realicen.

IV. Explicación al proceso para hacer efectivas las fianzas.

De conformidad con el Reglamento de la Ley, para hacer efectivas las fianzas, las dependencias y/o entidades, al momento de solicitar las afectaciones de fianzas, deberán remitir de manera adjunta a su oficio de solicitud, dos copias certificadas o cotejadas (de acuerdo con sus atribuciones), del expediente que integre toda la información documental que demuestre que es procedente realizar la afectación de fianza, la cual debe consistir puntualmente en la siguiente:

a) Contrato o documento en que conste la obligación o crédito a cargo del fiado.

b) Póliza de la fianza que garantizó el crédito u obligación de que se trate y, en su caso, los documentos modificatorios de la misma.

c) Acta levantada, con intervención de las autoridades competentes, donde consten los actos u omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento de las obligaciones o créditos garantizados.

d) Liquidación formulada (finiquito), por el monto del crédito u obligaciones exigibles y sus accesorios legales si éstos estuvieran garantizados.

e) Si los hubiere, copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentado por el fiado, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas.

f) Los demás documentos que estimen convenientes, así como los que solicite, en su caso, la Secretaría.

Para mejor entendimiento de los requisitos documentales señalados, se explica a continuación de forma detallada, en que consiste cada uno:

- Sobre el inciso a), el contrato consiste en el instrumento documental administrativo por virtud del cual, por voluntad de las partes, fue contratada una obra o prestación de servicio, por un monto acordado y a tiempo determinado.
- Sobre el inciso b), las pólizas de fianza se constituyen como contratos accesorios al contrato principal, cuyo objeto es garantizar las obligaciones que en éste fueron contraídas. Estas pólizas señalan los montos y los conceptos específicos que

garantizan (ej. anticipo, cumplimiento total o vicios ocultos), siendo estos los documentos base de la acción de los requerimientos de pago.

Entendido lo anterior, conviene precisar en adición sobre este requisito, que las dependencias o entes deberán, preferencialmente, hacer exigible por medio del clausulado de los contratos que celebren, que es indispensable que las pólizas de fianza que sean contratadas como garantías, sean expedidas por instituciones afianzadoras que cuenten con un domicilio y un representante legal dentro de la circunscripción que compete a esta Secretaría, es decir, dentro del territorio del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se les pueda notificar a dichas instituciones los oficios que contengan el requerimiento de pago de pólizas de fianza, en términos de lo dispuesto en el artículo 282, fracción II, de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

- Sobre el inciso c), el acta levantada con intervención de autoridades competentes se refiere a lo que en la función administrativa se denomina "acta circunstanciada de hechos". Este documento tiene como propósito recabar los hechos del estatus de avance sobre el objeto contratado, debiendo señalar los porcentajes de conceptos como avance de obra, avance financiero, o avance sobre la prestación de servicio. El acta referida debe ser realizada por las autoridades y/o funcionarios que legalmente sean materialmente competentes para elaborarla, debiendo estos fundar y motivar dicha competencia en el apartado correspondiente del documento.

- Sobre el inciso d), la liquidación formulada consiste en la determinación de la cuantificación en cantidad líquida del incumplimiento, la cual debe ser de fácil entendimiento, con respecto a los cálculos que determinan el monto exigible y por los cuales deberán hacerse efectivas las pólizas de fianza.

  Sobre este requisito, es necesario precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha emitido una "*guía en materia de garantías*", la cual tiene por objeto dar a conocer los formatos e instructivos que facilitarán dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas en materia de garantías no fiscales, como en el caso de la liquidación formulada. Así pues, el formato precisa tanto su objeto, como el instructivo para su llenado, indicando de manera puntual que el finiquito de obra y la resolución de rescisión o de terminación anticipada, son el principal soporte para la formulación de la liquidación formulada a que se alude, toda vez que son las documentales que evidencian la exigibilidad de la obligación y las operaciones aritméticas efectuadas que indican el importe por el cual debe hacerse efectiva la fianza.

En apoyo a lo anterior, se hace de conocimiento que el documento en cita puede ser consultado en formato digital a través del siguiente enlace: https://extranetce.hacienda.gob.mx/sitios/tramitesyservicios_tesofe/SiteCollectionDocuments/ETOS%202019/Guiamateriadegarantias.pdf. Asimismo, para facilitar su hallazgo, se informa que el formato que nos ocupa se encuentra denominado como "FORMATO ONCE", el cual se ubica en la página 40 de la guía (se remite adjunto al presente, copia física de dicho formato).

- Sobre el inciso e), se establece que, en caso de haber acontecido algún procedimiento judicial o administrativo que haya sido promovido por la contratista (fiada), se debe incluir en la solicitud de afectación de fianzas toda la documentación relativa a dicho(s) procedimiento(s), especialmente las documentales consistentes en: copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal; las sentencias o resoluciones firmes emitidas por las autoridades competentes; y las notificaciones que correspondan a estas últimas.

- Por último, en lo que respecta al inciso f), se refiere a toda la documentación que sea considerada por las dependencias y/o entes, así como por la Secretaría y la Dirección, relevante para el proceso de afectación de fianzas. Un ejemplo de ello es que se debe incluir toda la documentación que forma parte del procedimiento de rescisión y/o de terminación anticipada (incluyendo notificaciones), en virtud de que dichos procedimientos, a través de las resoluciones que les ponen fin, acreditan la exigibilidad de las pólizas de fianza.

Así pues, la documentación previamente detallada se conforma como la mínima necesaria para requerir el pago de pólizas a una afianzadora, ya que es con base en esta, que se pone en evidencia el incumplimiento por parte del fiado en las obligaciones que hubiere contraído mediante contrato que haya celebrado con una dependencia y/o entidad, o bien, que por circunstancias no imputables a éstas últimas y la contratista, se deba dar por terminado anticipadamente el contrato celebrado, volviendo exigible la afectación de fianzas, si resulta procedente.

Ahora bien, una vez que la Dirección ha recibido el oficio de solicitud de afectación de fianzas, así como toda la información documental necesaria para realizar el requerimiento de pago a la afianzadora, procederá a revisar que se haya cumplido con los requisitos que deben colmarse en el oficio de solicitud, así como también verificará que toda la documentación sea la idónea y se encuentre completa. En el supuesto de que exista alguna deficiencia en el oficio y/o en la documentación, la Dirección comunicará sobre dicha situación a la dependencia y/o entidad solicitante,

para que ésta lo subsane a la brevedad posible y así lograr estar en condiciones de proseguir con la afectación deseada.

En ese sentido, una vez que la Dirección se encuentre en condiciones para llevar a cabo la afectación de las fianzas, procederá de la forma siguiente:

a. Requerirá de pago, en forma personal o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza; ello lo realizará en las oficinas principales, en las sucursales, en las oficinas de servicio o bien en el domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago.

En el requerimiento se apercibirá a la afianzadora de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que dicho requerimiento le sea notificado de conformidad con el párrafo precedente, no hace el pago de las cantidades reclamadas, se le rematarán en bolsa, valores de su propiedad o, en su defecto, se dispondrá de las inversiones a que se hace referencia en el inciso siguiente.

b. Cuando transcurrido un plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que cause efectos la notificación del requerimiento de pago, la afianzadora no acredite ante la Secretaría (como autoridad ejecutora) haber efectuado el pago de lo reclamado o haber demandado su improcedencia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Dirección, acompañando copia del requerimiento en la que conste la fecha de su recepción por parte de la afianzadora de que se trate o, en su caso, de la sentencia firme que declare la validez del requerimiento formulado, solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que se rematen en bolsa, valores propiedad de la afianzadora o, en su defecto, se disponga de las inversiones de la reserva de fianzas en vigor, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado, mismo que se pondrá a disposición de la Secretaría (como beneficiaria).

c. En caso de que la afianzadora demande ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la improcedencia del requerimiento de cobro formulado, dicha afianzadora deberá comunicarlo conjuntamente a la Secretaría y a la Dirección (debiendo acompañar adjunto a su comunicado copia sellada de la demanda respectiva), para efectos de que ésta última suspenda el procedimiento de ejecución de que se trate.

d. En relación con el punto anterior, en el supuesto de acontecer juicio contencioso administrativo en contra del requerimiento de pago, la Dirección de lo Contencioso de

la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, en representación legal de la Secretaría y de la Dirección, formulará contestación a la demanda y dará seguimiento del juicio hasta su conclusión. En caso de que el juicio concluya con la emisión de sentencia definitiva que declare la validez del requerimiento de pago y esta adquiera firmeza, se comunicará a la Dirección para iniciar con el procedimiento de remate de valores propiedad de la afianzadora. Por el contrario, en el supuesto de que se emita sentencia definitiva que declare la nulidad del requerimiento, en términos de lo dispuesto en el título III, capítulo II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se interpondrá el medio de defensa de recurso de revisión en contra de la sentencia, con el propósito de lograr su revocación.

Ahora bien, en caso de que perdure la nulidad decretada en sentencia, esta será comunicada a la dependencia o entidad solicitante de la afectación de fianzas, para efecto de que, si así lo decide, vuelva a solicitar a la Secretaría y a la Dirección, la afectación de las garantías, siempre y cuando la nulidad en comento no haya sido con motivo de una de las causas que vuelve incobrables las pólizas, las cuales se detallan en el capítulo siguiente.

e. Por último, cuando acontezca que la afianzadora, por sí o por virtud de sentencia firme de validez, efectúe el pago reclamado, la Secretaría registrará el importe del pago obtenido como consecuencia del requerimiento y emitirá el comprobante de pago correspondiente, en el cual se hará referencia al número de identificación de las pólizas de fianza y el contrato que garantizaron. El original de este comprobante será remitido a la afianzadora para los efectos legales a que haya lugar.

V. Circunstancias por las que se vuelve incobrable una fianza y sus efectos.

Si bien el objeto de realizar una afectación de fianza es el de obtener el pago del monto que sea reclamado y que se especifica en la póliza, también puede darse el supuesto de que una fianza resulte incobrable. Dicho lo anterior, resulta necesario especificar cuándo se vuelve incobrable una fianza, así como los efectos que tienen como consecuencia.

Para empezar, el primer supuesto por el que una fianza se vuelve incobrable, es cuando derivado de un juicio contencioso administrativo, acontezca sentencia definitiva firme emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se decrete la nulidad lisa y llana del requerimiento de fianza realizado, y que la motivación de dicho pronunciamiento derive de un vicio de fondo, lo que se traduce en el defecto, la falta, el error o la afectación, con respecto al objeto esencial o principal del acto jurídico.

En caso de suscitarse el supuesto antes expuesto, la Dirección realizará un acuerdo de conclusión, especificando los motivos por los que resultó incobrable, y anexará el soporte documental, si existe, que acredite dicha imposibilidad, procediendo posteriormente a remitir el expediente a la unidad administrativa competente, para su archivo.

Ahora bien, cuando por un vicio de forma o de fondo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emita sentencia definitiva donde decrete la nulidad para el efecto de que éste sea subsanado, en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contará con un término de cuatro meses tratándose del juicio ordinario o un mes tratándose del juicio sumario, para realizar las acciones conducentes a efecto de subsanar dicho vicio y crear las condiciones necesarias para volver a realizar la afectación de fianza. En ese respecto, la Dirección y la dependencia o entidad contratante, deberán colaborar coordinadamente en cumplimentar con la determinación de la sentencia definitiva, con el objetivo de volver a requerir de pago a la afianzadora. En caso de que no sea subsanado el vicio dentro del término aludido, con independencia de las circunstancias que hayan acontecido para ello (y que se especificarán en el acuerdo de conclusión de archivo), la fianza se volverá incobrable a causa de la preclusión del derecho.

El segundo supuesto por el que una fianza se vuelve incobrable sucede cuando ha transcurrido el término de caducidad para realizar la afectación de fianza, previsto en el artículo 174 de la Ley, y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, haya emitido sentencia definitiva de nulidad lisa y llana, por tal motivo.

En caso de suscitarse el supuesto antes expuesto, la Dirección realizará un acuerdo de conclusión, especificando que la fianza resultó incobrable por motivo de haberse actualizado la caducidad, y anexará de manera adjunta, copia de la sentencia firme con la que se acredite dicha incobrabilidad, procediendo posteriormente a remitirlo a la unidad administrativa competente para su archivo.

Es así, que los anteriores se conforman como los supuestos por los cuales se vuelve incobrable una fianza, y por ende no se puede volver a reclamar el pago de la misma, sin embargo, aunado a lo ya expuesto, también es necesario manifestar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, igualmente emite sentencias definitivas de nulidad, pero donde sus pronunciamientos son motivados por vicios de forma, no obstante, cando ello acontece así, quedan a salvo los derechos de la Dirección, para volver a realizar un nuevo requerimiento de pago a la afianzadora, pues la facultad para realizar dicho acto de ejecución, es de carácter discrecional.

Como apoyo a lo argumentado al final del epígrafe que antecede, tenemos la Tesis de carácter Jurisprudencial con número de registro 2020803, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y que se expone a continuación:

Registro digital: 2020803

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A. J/4 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3350

Tipo: Jurisprudencia

NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la nulidad implica, tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y consecuente; de ahí que estos efectos se adjudican a la resolución ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de acción u omisión y restauración del orden jurídico, entre otras). Además, el concepto genérico de dicha nulidad, debido a sus variantes o modalidades, debe apreciarse en un contexto sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y repercusiones pertinentes y conformes a casos concretos. En estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el resultado de las etapas del control judicial respectivo, a saber: I) determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la resolución, acorde con la trascendencia del vicio identificado, conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de las ineficacias atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos del precepto 57 de la misma ley. **Ahora, la declaratoria aludida puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean formales, procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de facultades regladas o en respuesta a una instancia promovida por un particular)**; B) libertad para ejercer facultades, ya sea que confiera cierto arbitrio (con libertad para apreciar o adjudicar consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la autoridad, actualizándose un supuesto de nulidad (lisa y llana), con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o consecuencias, aunque sujeto al plazo legalmente establecido (cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y llana o absoluta, que imposibilita a la autoridad demandada para reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa juzgada o temas decididos definitivamente; o, D) precisar medidas de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o agravio causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –nulidad– puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos de esa declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, como incluso lo prevé el numeral 57

indicado, al señalar que los efectos ahí previstos se producirán "aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana".

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Luego entonces, cuando acontezca la emisión de una sentencia de nulidad por vicios de forma, procedimentales o de fondo, y ésta haya quedado firme, la Dirección avisará vía oficio a la dependencia o entidad que haya solicitado la afectación, para efecto de que ésta última vuelva a solicitar que se afecte la fianza, debiendo cumplir nuevamente con los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de la Ley, logrando con ello que la Dirección se encuentre nuevamente en condiciones óptimas de volver a requerir el pago de la fianza deseada.

VI. Referencias bibliográficas

"LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013, consultable vía internet en la página oficial de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través de la liga electrónica: https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LISF.pdf

"REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS, DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1991, consultable vía internet en la página oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la liga electrónica: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFIF_Art95.pdf

"LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, consultable vía internet en la página oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la liga electrónica: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_200521.pdf

"REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, consultable vía internet en la página oficial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la liga electrónica: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf

"LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS", publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 7 de diciembre de 1998, consultable vía internet en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, a través de la liga electrónica: https://celem.michoacan.gob.mx/destino/a2000/O-35_1673466885_COMPILADO%202022DIC22%20DEC%20325%20LEY%20OBRAS%20PUBLICAS.pdf

"REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 20 de agosto de 2015, consultable vía internet en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, a través de la liga electrónica: https://celem.michoacan.gob.mx/destino/2015/O10602po.pdf

"LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de junio de 1998, consultable vía internet en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, a través de la liga electrónica: https://celem.michoacan.gob.mx/destino/a2000/O4fue.pdf

"REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 04 de febrero de 2020, consultable vía internet en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, a través de la liga electrónica: https://celem.michoacan.gob.mx/destino/2020/O16863fue.pdf

"REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el 15 de febrero de 2021, consultable vía internet en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, a través de la liga electrónica: https://celem.michoacan.gob.mx/destino/2022/O18364fue.pdf

